



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-012-2019-00195-01 (O2-22-388)  
**Accionante:** CARLOS ANTONIO MEDINA MEDINA  
**Accionada:** JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E.  
**Procedencia:** JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 114  
**Asunto:** NULIDAD DICTAMEN - PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-012-2019-00195-01 (O2-22-388), instaurado por CARLOS ANTONIO MEDINA MEDINA en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por COLPENSIONES E.I.C.E., así como también el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última administradora, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### 1. ANTECEDENTES

El señor CARLOS ANTONIO MEDINA MEDINA, actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ DE ANTIOQUIA - JRCIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ – JNCI y COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de que se declare la nulidad de los dictámenes nros. 5098 del 19-09-2014, 074848 del 16-02-2015 y 201454166MM emitidos, en su orden, por la JRCIA y la JNCI y COLPENSIONES E.I.C.E., y en consecuencia, obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir del 24 de febrero de 2014 a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E. De igual manera, reclama el pago de los intereses de mora sobre las mesadas pensionales adeudadas o, en subsidio, la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones, sostiene que se afilió al RPMPD administrado por COLPENSIONES E.I.C.E. a partir del 1° de febrero de 2003, entidad oficial que le otorgó mediante dictamen nro. 201454166MM del 19-05-2014 una PCL del 63,75% y fijó como fecha de estructuración del estado de invalidez el 16 de octubre de 1963. Acota que presentó impugnación ante la JRCIA y la JNCI, organismos calificadores que, por una parte, mantuvieron el valor porcentual asignado por la administradora del RPMPD, y por otra, determinaron como fecha de estructuración el 22 de mayo de 1989.

Inconforme con los resultados del proceso de calificación del estado de invalidez, acudió a la IPS UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA para ser reexaminado, obteniendo un tercer dictamen que dispuso modificar la fecha de estructuración al 24 de febrero de 2014. Finalmente, advirtió que ha cotizado más de 50 semanas durante el lapso comprendido entre el 24 de febrero de 2011 y el 24 de febrero de 2014, coligiendo que le asiste derecho a sus reclamaciones, privilegiando la eficacia y validez de este último dictamen pericial.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 02 de mayo de 2019 (págs.104 y 105, doc.01, carp.01), y se notificó a las demandadas JRCIA y JNCI el 13 de agosto de 2019 y el 12 de abril de 2019 (págs. 142 y 747, doc.01, carp.01); a COLPENSIONES E.I.C.E. el 04 de junio de 2019 (pág.231, doc.01, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 24 de mayo de 2019 (págs.135 a 136, doc.01, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.111 a 132, doc.01, carp.01), entidad que luego de tener por cierta la afiliación del actor al RPMPD, junto con el contenido de los dictámenes emitidos por las entidades competentes y la respuesta brindada a la reclamación administrativa, se opuso a la prosperidad de los pedimentos con la formulación de las excepciones perentorias de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez de origen común, inexistencia de la obligación de pago de los intereses moratorios, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

Las juntas calificadoras plantearon al unísono oposición a las reclamaciones impetradas en su contra, presentando como excepciones de mérito las que denominaron como falta de legitimación en la causa por pasiva de la Junta Regional, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez es plenamente válido, la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandante, ausencia de causa para pedir, el estado clínico del paciente pudo variar después de que la Junta Regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad, legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, la calificación de la fecha de estructuración de la invalidez debe fundamentarse en criterios médicos-técnicos-científicos, falta de legitimación en la causa por pasiva de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y la genérica (págs.151 a 174 y 177 a 227, doc.01, carp.01).

## **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 12 de octubre de 2022 (doc.28, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la que dispuso, con arreglo a la pericia adosada con la demanda, reconocer la pensión de invalidez al impetrador a partir del 25 de febrero de 2014, en cuantía inicial de un salario mínimo legal mensual vigente, a la par de que, dejó sin valor ni efectos los “...dictámenes emitidos por COLPENSIONES N° 201454166MM del 19 de mayo de 2014; por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA N° 50928 del 19 de septiembre de 2014; y por la JUNTA NACIONAL CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ N° 074848 del 15 de mayo de 2015, en cuanto a la fecha de estructuración del señor CARLOS ANTONIO MEDINA MEDINA”. (minuto 00:01 a 33:42, doc.27, carp.01).

## **1.3. Recurso de Apelación**

La poderhabiente de COLPENSIONES E.I.C.E. inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se mantenga indemne a su representada frente a los pedimentos formulados en el libelo inaugural. Para los anteriores propósitos, adujo que la calificación del estado de invalidez se encuentra reglada conforme lo previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, y es por ello que, al no encontrarse apoyado el resultado del dictamen de PCL emitido por la UdeA en la

historia clínica del promotor del juicio, no es posible acoger su contenido ni otorgarle efectos legales (minuto 34:20 a 38:21, doc.27, carp.01).

#### **1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta**

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos que no fueron objeto de alzada.

#### **1.5. Trámite de Segunda Instancia**

El recurso de apelación y el grado jurisdicción de consulta en favor de la administradora del RPMPD, se admitieron el 18 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 24 siguiente (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de así estimarlo.

La poderhabiente judicial de COLPENSIONES E.I.C.E (doc.04, carp.02), solicitó la revocatoria del derecho reconocido en primera instancia, reiterando en los mismos términos los razonamientos expuestos en el recurso de alzada.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada además de focalizarse en los puntos de inconformidad materia de alzada, también se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad oficial, en los puntos en los que no fue objeto de impugnación.

#### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor CARLOS ANTONIO MEDINA MEDINA le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen laboral a partir del 25 de febrero de 2014, efecto para el que será necesario determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos recabados y conforme a los principios que informan la sana crítica. Asimismo, la Sala fincará su análisis en establecer si concurren los requisitos legales para que el afiliado cause y entre al disfrute de

la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia.

## **2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala**

La Sala revocará íntegramente la decisión de primer grado, considerando que como colofón del ejercicio ponderativo entre la prueba pericial allegada con la demanda y los demás medios suasorios incorporados y practicados en sede judicial, debe mantenerse incólumes los dictámenes de PCL emanados de la JRCIA y la JNCI, como quiera que, la calificación de PCL efectuada por la UdeA no tuvo en cuenta el Manual Único para la Calificación de la Invalidez - MUCI que se encontraba vigente para la época de la evaluación ni los lineamientos que allí se reglan para la determinación de la fecha de estructuración del estado de invalidez, en franca infracción a las disposiciones legales que reglamentan la materia. Aparejado lo anterior, con que el actor no demostró con suficiencia la pérdida real de su capacidad laboral residual, a fin de determinar con certeza el derecho a la pensión de invalidez a la que aspiraba.

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el pretensor cotizó para los riesgos de IVM al RPMPD a partir del 1º de febrero de 2003; que desde su afiliación al RPMPD al 30 de septiembre de 2017 totalizó

599,43 semanas (págs.68 a 75, doc.01, carp.01); que COLPENSIONEES E.I.C.E. el 19-05-2014 calificó la PCL del actor en un 63,75%, tomando como fecha de estructuración el 16-10-1963 y determinando su origen como común (págs.48 a 50, doc.01, carp.01; págs.30 a 32, doc.02, carp.01); que la JRCIA y la JNCI, mantuvieron la PCL del 63,75% otorgada por COLPENSIONES E.I.C.E., señalando que la fecha de estructuración correspondía al 22 de mayo de 1989 (págs.52 a 67, doc.01, carp.01), y que la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia el 10-10-2018 determinó que el actor presentaba un 63,75% de PCL de origen común, estado que se indicó se estructuró a partir del 24-02-2014 (págs.33 a 39, doc.01, carp.01).

### **2.3.1. La calificación de la pérdida de capacidad laboral**

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguros que asuma lo riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, presentara reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen “...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada

*le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. -Negritas intencionales de la Sala-*

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto *“Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías”* (SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez *“... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo* (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

### 2.3.2 Del Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, se tiene que la juzgadora de primer grado postuló como argumento axial de la decisión hoy criticada, la pertinencia y fuerza demostrativa del dictamen de PCL que fuera emitido por la IPS

Universitaria de la Universidad de Antioquia; pericia en la que, dicho sea de paso, se tuvieron en cuenta como *diagnósticos* “*i. Otros tipos de retraso mental profundo: deterioro del comportamiento de grado no especificado, y; ii. Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión*”; justificando apartarse de la fecha de estructuración de la invalidez establecida por las juntas calificadoras con la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional referente a la capacidad laboral residual, afirmando con tal propósito que “...*la fecha de estructuración de la invalidez del paciente puede fijarse según se evidencia en la historia clínica para el 24/02/2014 momento en el que se evidencia que si bien se tiene como antecedente un retraso mental, la severidad de la deficiencia se intensifica por la presencia además de un trastorno afectivo bipolar como se aprecia en la evaluación del médico tratante*”.

En la sustentación y para la contradicción de la mentada prueba pericial, se presentó el profesional de la medicina José William Vargas Arenas, quien manifestó que es médico especialista en salud ocupacional del CES desde el año 1995 y que actualmente es pensionado.

Mencionó que el dictamen del pretensor fue practicado en el año 2018 a solicitud del gestor judicial y con miras a controvertir la fecha de estructuración establecida por la JRCIA y la JNCI con valoraciones realizadas en época pretérita. Informó que la calificación del estado de invalidez del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA se fundamentó en el Decreto 917 de 1999 y en la historia clínica entregada. En lo que concierne al estado de salud y las patologías que padece el demandante, puso de presente que aquel presenta un cuadro de invalidez congénito por motivo del trastorno de retraso mental que le fue diagnosticado. Frente a la fecha de estructuración del estado de invalidez, sostiene que la misma fue hallada conforme con la historia clínica y lo discurrido por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional al abordar la capacidad laboral residual de aquellas personas que sufren de enfermedades congénitas, defendiendo con ello el día 24 de febrero de 2014 como hito de estructuración, calenda a partir de la cual y de acuerdo con la nota de consulta en el Hospital Mental de Antioquia que reposa en la historia clínica, no pudo continuar laborando como lustra botas. En el mismo sentido y dando respuesta a los interrogantes formulados por las partes, recordó que la condición que sufre el señor MEDINA MEDINA es progresiva y de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez - MUCI, alcanza la PCL del 50% desde el nacimiento.

Llegado a este punto, se impone recordar que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, el cual señala:



*“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.*

Significa lo anterior que, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras hoy demandadas. Ello, en atención a que dichos organismos en los dictámenes allegados, justificaron con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el origen de las patologías y la fecha de estructuración de las enfermedades que padece el accionante, tomando, entre otros, como elementos demostrativos la historia clínica y los conceptos médicos que reposan en el cartulario, reiterando la JNCI que la fecha de estructuración corresponde al 22 de mayo de 1989, estimando que *“Una vez se analiza la historia se encuentra que no es factible modificar la fecha de estructuración, dado que la existencia del retraso mental y el trastorno afectivo con compromiso cognitivo se encuentran documentados desde mínimo 22-05-1989. Las historias de los médicos tratantes que son prueba vital para establecer la fecha de estructuración mencionan que existe gran severidad que ha requerido hospitalizaciones previas a 2008”*.

Cumple destacar por la Sala no se encuentra ninguna disconformidad en el resultado de la valoración del dictamen de la JNCI, en tanto es la que mejor que sustenta, con grado de certeza, el estado de salud del actor; nótese que el médico adscrito a la UdeA, reconoció que basó la fecha de estructuración del estado de invalidez del actor conforme a la tesis de la capacidad laboral residual que ha sido desarrollada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia; empero y más revelador aún, reconoció en vista pública que, en la realidad, la enfermedad del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA es congénita y la PCL se presentó desde su nacimiento. Lo expuesto, deviene útil para descubrir una imprecisión en el ejercicio de valoración del perito, quien privilegió su interpretación del concepto de la capacidad laboral residual sobre la evidencia científica, la historia clínica y el desarrollo normal de la enfermedad que padece el promotor, para fijar la fecha de estructuración del estado de invalidez en abierta infracción a lo delineado por el Decreto 1507 de 2014.

Con todo, para ahondar en razones, se impone agregar, que las inferencias del profesional de la medicina de la UdeA se sustentaron en el Decreto 917 de 1999, MUCI que NO se encontraba vigente para la época de la calificación del estado de invalidez del accionante en el año 2018.

En ese contexto, traslúcido se muestra el apartamiento a lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y al artículo 41 de la Ley 100 de 1993 en relación con el MUCI al que debe acudir en la solución de estas controversias, pues “...es evidente que por expresa disposición del legislador, **será el manual único para la calificación de invalidez vigente para la fecha de la determinación de esta última condición, aquél que regente el estudio respectivo y no otro diferente.** Recordemos que, el precitado documento, según lo define el artículo 1º del Decreto 1507 de 2014 se «constituye en el instrumento técnico para evaluar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por los artículos 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y 18 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 776 de 2012». **Y es que es tan relevante el momento en que se practica el dictamen pericial que, en tal ocasión, entre otros aspectos, se logra establecer, en definitiva, aquel espacio temporal en que acaece realmente la pérdida de la capacidad laboral, conocida como fecha de estructuración y que puede ser concomitante con la expedición de la experticia o en un tiempo anterior** (CSJ SL2082-2022)<sup>1</sup>...”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

De ahí que, la Sala se aparte diametralmente de las consideraciones expuestas por el médico evaluador del dictamen adosado con el libelo introductorio, quien considera, en líneas generales, que el estado de invalidez del accionante se estructuró en el año 2014, por cuanto además de soportar su conclusión en una interpretación personal de la noción de la capacidad laboral residual, no se apoyó en exámenes diagnósticos y demás pruebas técnicas pertinentes para calificar el estado de invalidez de una persona, en abierta transgresión a los preceptos regulativos de esta materia.

Lo que viene de decirse, es suficiente para REVOCAR el fallo de primer grado en cuanto fulminó la nulidad de los dictámenes expedidos por la JRCIA y la JNCI, así como declaró la eficacia y firmeza de aquel elaborado por la IPS UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, por intermedio del médico JOSÉ WILLIAM VARGAS ARENAS, el 10 de octubre de 2018; manteniendo, por contera, el 24 de mayo de 1989 como fecha de estructuración del estado de invalidez del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA.

Apuntalado este ítem, la Sala abordará las pretensiones restantes enfiladas al reconocimiento de la prestación pensional por invalidez que aquí se reclama, conforme con el ejercicio ponderativo que a continuación se expone.

---

<sup>1</sup> CSJ SL3383 de 2022.

### 2.3.3. De la Pensión de Invalidez

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, Preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne al fin último de la prestación económica que se deriva del riesgo de invalidez con ocasión de la materialización de una contingencia de origen común o bien laboral, la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia ha puntualizado en sentencias SL3275 de 2019 y SL3873 de 2022 que, aquella está *“destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo”*; previo, desde luego, al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para su causación y disfrute.

Así se desprende de lo asentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para la que por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables en orden a resolver el reconocimiento de esta prestación de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

### 2.3.4. La Capacidad Laboral Residual

Ahora bien, por sabido se tiene que, en materia de pensión de invalidez, la jurisprudencia ha reconocido en favor del afiliado el principio de la condición más beneficiosa que tiene aplicación

directa cuando dentro del ordenamiento jurídico se surte una sucesión normativa, con ocasión de las disposiciones que se incorporan en procura de regular una materia sobre la que ya se había emitido una regulación, principio que tiene por objeto proteger a quienes, a pesar de no tener un derecho adquirido en sentido estricto, se encuentran en una situación jurídica y fáctica concreta por cuanto han cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación pensional, siempre que la sucesión normativa hubiere impuesto un trato diferente, más gravoso, y por un motivo no relevante, como lo es el hecho de que no obstante su situación consolidada, deba acreditar mayores requisitos.

Así mismo, ha consagrado la jurisprudencia nacional tanto de la Corte Constitucional, como de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en favor del afiliado que padece una enfermedad, catastrófica, degenerativa o congénita, una prerrogativa adicional, como es la excepción a la fecha de estructuración dispuesta por el dictamen de pérdida de capacidad laboral, como parámetro para establecer el trienio que determina el cumplimiento de la densidad de semanas requeridas para alcanzar el derecho, ello en virtud de la capacidad laboral residual, con la que cuentan los afectados por dichas enfermedades; prerrogativa según la cual no siempre la fecha de estructuración dictaminada concuerda con la pérdida de la capacidad laboral generante del derecho, y en esa medida, el trienio puede computarse, i) desde la fecha de elaboración del dictamen, ii) la fecha de solicitud de la pensión o iii) la fecha en la que se efectuó la última cotización. (CSJ SL3275-2019, SL3992-2019, SL770-2020, SL5023-2021, SL002-2022, entre otras).

Ahora bien, dentro de la línea jurisprudencial antes descrita, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adicionalmente reiteró que, la prerrogativa de la capacidad laboral residual no supone una forma de defraudar el sistema, sino que comporta una garantía excepcional que protege a las personas con enfermedades congénitas, catastróficas, crónicas o degenerativas o aquellas cuyas secuelas se manifiestan de forma posterior a su diagnóstico, cuando mantienen su capacidad laboral y en virtud de ello realizan cotizaciones ulteriores al sistema, mismas que puedan hacer valer en el cómputo de las semanas mínimas exigidas para causar el derecho a la pensión de invalidez.

Sin embargo, ha precisado la Corte Suprema de Justicia que la posibilidad de contabilizar las semanas posteriores a la estructuración del estado de invalidez se restringe a que las mismas *“sean producto de la capacidad laboral que permite al afiliado desempeñar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar”* (SL2332-2021 reiterada en la sentencia SL002-2022), agregando que los aportes realizados deben responder a la capacidad laboral y no a que se hubieran

efectuado con la finalidad de acreditar las cotizaciones para obtener la pensión (CSJ3275-2019, SL5023-2021).

Refiere la Sala lo anterior, para recalcar que en el *sub lite* el promotor del juicio se afilió al régimen subsidiado del SGSSP administrado por la administradora accionada el pasado 1° de octubre de 2002, totalizando 599,43 semanas cotizadas en el lapso comprendido entre el 1° de febrero de 2003 y al 30 de septiembre de 2017, conforme da cuenta la historia laboral aportada por COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.GEN-RES-CO-2018\_13592913-20181107025610.pdf, subcarp.03, carp.01). No obstante lo anterior, concluye la Sala que, no le asiste al señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA el derecho a la pensión de invalidez, aun aplicando la prerrogativa de la capacidad laboral residual abordada en el punto retropróximo, porque a pesar de la densidad de semanas que reporta, lo cierto es que, las mismas se realizaron en calidad de cotizante independiente, afirmando el demandante en el año 2015, en escrito dirigido a la JNCI que, desde el año 2008 se encuentra totalmente incapacitado para laborar, que toda su seguridad social es subsidiada por el Estado y que su hermana es la persona que vela por él (págs.43 a 45, doc.02, carp.01); al tiempo que en la valoración de la JRCIA del 09 de septiembre de 2014 y la historia clínica del 05 de junio de 2015, se indicó en su orden que:

*“El paciente comenta que vive solo, recibe ayuda económica de los amigos, trabajaba en Envigado, lo hizo hasta hace poco porque le manchaba las medias con betún a sus clientes en épocas anteriores hacia 8 o 10 lustradas y últimamente solo lograba hacer 2 o 3. Se encuentra en desacuerdo con la calificación en cuanto a la fecha de estructuración porque antes del 2010 lograba ser independiente y funcional.”*

*“Trabajo(sic) como lustrabotas por 8 años hasta hace un año y medio. Refiere que vive con una hermana, padre fallecido el 6 de diciembre de 2003 y [m]adre 30-01-1986. Con antecedente de retraso mental y TAB, con múltiples hospitalizaciones, la última hace 4 años”;* afirmaciones que se muestran contradictorias con la información que exhibe la historia laboral expedida por la administradora del RPMPD demandada, que da cuenta que el pretensor mantuvo cotizaciones constantes y asiduas al SGSSP al menos desde el año 2010 y hasta el año 2017.

Entonces, llegados a este punto del sendero emerge una situación incontestable, cual es, que, no se prueba cuáles de las cotizaciones sufragadas posteriores al estado de invalidez y hasta el año 2017, fueron realizadas como resultado de una actividad laboral autónoma y que no obedecen a los recursos económicos provenientes de familiares o amigos, luego no se podría predicar que existió una real capacidad laboral residual, y tanto más importante, a partir de qué

fecha el promotor ciertamente no pudo laborar definitivamente por motivo de su estado de salud.

A similar conclusión llegó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando delineó:

*“Conforme al derrotero fijado por esta Sala lo cierto es que los aportes cotizados por cuenta propia del accionante no permiten encontrar que correspondieran efectivamente a una probada y real capacidad del actor y, contrario a ello, deja ver que se efectuaron con la finalidad de acreditar las cotizaciones para obtener una prestación del sistema al no contar con capacidad para trabajar” (SCJ SL5023-2021).*

Ello así, no habiendo probado el impulsor del proceso que sus cotizaciones lo fueron como resultado de su fuerza laboral y que no existen elementos de convicción demostrativos, más allá de toda duda, de una real capacidad laboral residual del demandante, se dispondrá por la Sala la revocatoria de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en tanto acogió los pedimentos incoados en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. por parte del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA, para en su lugar, ABSOLVER a la administradora del RPMPD, de todas y cada una de las pretensiones enarboladas por el señor MEDINA MEDINA.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 365 del CGP, y advirtiendo que el fallo de primera instancia fue revocado en su integridad, y que el señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA resultó vencido en el juicio, a su cargo se impondrán las costas de ambas instancias, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. De conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de medio (1/2) SMMLV, vale decir, \$580.000. Las costas de primera instancia, tásense por el *a quo*.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** REVOCAR íntegramente la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. En su lugar, ABSOLVER a COLPENSIONES E.I.C.E. de todas y cada una de las pretensiones

formuladas en su contra por parte del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA, según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** COSTAS en ambas instancias a cargo del señor CARLOS ALBERTO MEDINA MEDINA, fíjense como agencias en derecho de segunda instancia la suma de medio (1/2) SMMLV, vale decir, \$580.000. Las de primera instancia, tásense.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, aplicando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

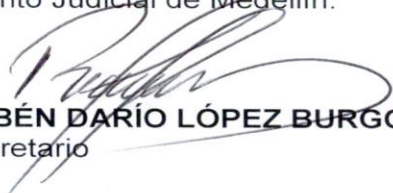
**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**  
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario